



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Sentencia Definitiva

Expediente N° 22486/2023

**AUTOS: COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
DOGO ARGENTINO LTDA c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los, , reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN A. FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Llegan las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Cooperativa de Trabajo de Seguridad y Vigilancia Dogo Argentina Ltda. contra la Resolución N° RESOL-2023-2720-APN-DRLF#MT del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por la que se rechazó la impugnación presentada contra la Resolución N° RESOL-2020-8037-APN-DRLF#MPYT. Mediante dicho acto administrativo se impuso a la Cooperativa en cuestión, un multa por la suma de \$ 14.080,70 en concepto de infracción cometida al artículo 40 de la Ley 11.683, al haberse constatado, al momento del relevamiento, la presencia de la Sra. Cordoba Cyntia Vanesa Giselle, quien sería –según la demandada- una trabajadora en relación de dependencia de la Cooperativa sin la debida registración.

Según el órgano fiscalizador, el acta de comprobación no ha sido desvirtuada y en consecuencia se encuentra debidamente acreditada la infracción imputada la cual hace a la encartada merecedora de la sanción impuesta.

La actora cuestiona la resolución, preliminarmente sostiene que se acompaña boleta de depósito por la suma de \$ 14.050,7 con lo cual se acreditaría el cumplimiento del previo pago de la multa impugnada conforme art. 15 de la Ley 18.820 y modif. Solicita se declare la admisibilidad formal de su recurso. Posteriormente enumera los agravios que le causa la resolución. Sostiene que no han sido tratados ninguno de los fundamentos esbozados en su recurso de reconsideración ni fue analizada la voluminosa documental aportada, acusando a esa cooperativa de fraudulenta. Señala que tal como se acreditó en el expediente administrativo la cooperativa se encuentra correctamente inscripta para funcionar conforme resolución n° 93 emitida por el INAC (hoy INAES) otorgándosele la matrícula n° 15724 con fecha 15 de febrero de 1994. En lo relativo a la Sra. Cyntia Vanesa Giselle Córdoba, advierte que se encuentra registrada desde su asociación en el mes de diciembre de 2014 como asociada n° 5.428 conforme surge del acta n° 34 del libro de reuniones de administración n° 3 , ello, ante su solicitud de

Fecha de firma: 30/11/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37800794#386179802#20231128090456530



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

incorporarse voluntariamente a la misma. Además ha suscripto sus correspondientes cuotas sociales conforme copia del libro de registros de asociados y percibió en tiempo y forma sus retornos y excedentes repartibles, agrega que se encuentra afiliada al monotributo y que se la ha citado debidamente a la asamblea social ordinaria en su oportunidad. Acompaña documental que avalarían sus dichos y jurisprudencia que entiende aplicable a los presentes actuados.

I.- En primer término corresponde expedirse acerca de la habilitación de la Instancia para conocer el presente recurso.

El apelante ha efectuado el depósito previo de las sumas cuestionadas, conforme lo prescripto por la ley 18.820 (art. 15), modificada por las leyes 21.864 (art. 12) y 23.473, según surge de las constancias de autos, por lo que no encuentro óbice para ingresar en el análisis recursivo.

II.- Análisis del recurso.

En primer término cabe destacar que confirme surge del acta de inspección del expte n° 7-215-57521-2018 la Sra. Córdoba Cyntia Vanesa Giselle (CUIL n° 27314927325) al momento del relevamiento denunció una remuneración de \$ 13.900 abonada de forma mensual, una fecha de ingreso que data del 14/06/2014 y que realiza sus tareas durante 6 días a la semana con una jornada de 8 hs diarias. Para concluir, a la pregunta efectuada por el inspector de si es una socia cooperativa, responde que “no”.

Con lo cual, más allá de las manifestaciones de la apelante y la documental acompañada, estos elementos aportados a la causa no logran desvirtuar los fundamentos de la Resolución impugnada con respecto a la relación de dependencia detectada en la inspección, que cabe aclarar, se apoya principalmente en las propias declaraciones de la agente relevada al momento de efectuarse la inspección.

Ahora bien, la cuestión a dilucidar es si estamos en presencia de una genuina relación de asociativismo o ante una relación laboral encubierta en fraude a la ley laboral y previsional. En ese orden, debe ahondarse la investigación de modo de objetivar, sin margen de dudas, la certeza en cuanto se ha verificado un acto simulado y la consiguiente sanción que pretende imponerse.

El tema cooperativo y su tratamiento desde el punto de vista laboral y previsional ha sido objeto de numerosos estudios y análisis, tendiente a precisar -si lo hay- el vínculo que pueda existir con esa modalidad asociativa, sea en relación con la propia asociación, sea en torno de terceros que con ella contratan.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

La ley 20337, art. 2º, determina que las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. En las sociedades cooperativas se utiliza el trabajo de los socios. Son administradas por éstos sobre la base de la igualdad de derechos y obligaciones, el trabajo sólo puede ser prestado por los asociados, los beneficios son el resultado de una empresa en común que se reparten en forma proporcional, todos participan con un solo voto en la asamblea general y normalmente no pueden tener empleados ajenos salvo en situaciones extraordinarias (V. Gloria M.Pasten de Ishihara, Las cooperativas de Trabajo y la responsabilidad laboral. pub. en Doctrina Laboral abril 1994, pag.287 y ss).

De allí entonces que tratándose de una genuina sociedad cooperativa, en cuyo funcionamiento no ha mediado fraude o irregularidad que desnaturalice sus fines, la calidad de socio excluye la de trabajador dependiente (V. CNTrab. Sala VIII, abril 18 990. Saldaño Mercedes c/ Coop. de Trabajo Ltda. Sila :SD 14.915;entre otros ya citados). Por otra parte, existe jurisprudencia y doctrina que admite la posibilidad de coexistir la calidad de socio y trabajador, debiéndose en este último caso darse los supuestos que permitan inferir el vínculo laboral (Gloria M. Pasten de Ishihara, ob.cit. pag. 297, Sup. Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires, in re Wolozynski c/ Cooperativa Trabajadores 4 de setiembre s/ despido 29/8/90, Tribunal del Trabajo N° 2, de San Isidro Prov. de Bs. As).

El Instituto Nacional de Acción Cooperativa a través de la resolución 183/92 estableció la inexistencia de relación laboral entre los asociados y la cooperativa de trabajo, determinando en su art. 2º la obligatoriedad de cumplir con el régimen previsional en el sistema de trabajadores autónomos u otro legalmente habilitado (apartado a). La Resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social N° 784/92 declara, como norma general, que los asociados a las cooperativas de trabajo no revisten la calidad de dependientes de las mismas, debiendo considerárseles como trabajadores autónomos. Por otra parte, corresponde al ente recaudador en el ámbito de su competencia, verificar la existencia de fraude laboral y/o evasión de los recursos de la seguridad social en aquellas cooperativas que se encuentren en actividad (Decreto 2015/94). Es importante destacar, asimismo, la Resolución 4664/2013 que establece que la relación jurídica entre la cooperativa de trabajo y sus asociados es de naturaleza asociativa, autónoma e incompatible con las contrataciones de carácter laboral, civil o comercial (artículo 1, parte pertinente).

La Resolución General 4328/97 DGI (B.O.28/4/97) ratifica que los asociados a cooperativas de trabajo legalmente constituidas y autorizadas para funcionar

Fecha de firma: 30/11/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37800794#386179802#20231128090456530



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa deberán ingresar sus aportes con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social como trabajadores autónomos. En consecuencia, para desvirtuar la presunción en este caso en favor de la vinculación asociativa y no de la laboral, debe demostrarse que se está en presencia de una simulación o un fraude.

Las cooperativa están fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios (ley cit., art. 2); sus particulares formas de constitución; las condiciones de ingreso y los derechos de los asociados, así como las modalidades de retiro y, sobre todo, de exclusión de éstos (ídem, arts. 23 y 62); la formación del capital; las cuotas sociales; los caracteres de los bienes aportables; el régimen de gobierno, de administración y de representación del ente, y la fiscalización pública a la que éste se encuentra sometido. Otro tanto cabe decir acerca de lo atinente a los actos cooperativos (ídem, art. 4), a los principios democráticos y de igualdad entre los asociados (p.ej., ídem, art. 2.3) y, muy especialmente, a que el grueso de los llamados Accedentes repartibles, en una cooperativa de trabajo, está destinado a ser distribuido en concepto de retorno entre los asociados en proporción al trabajo efectivamente prestado por cada uno de éstos (ídem, art. 42.5.b).

La resolución 784/92 (27-7-1992) de la Administración Nacional de la Seguridad Social, declaró norma de alcance general que los asociados a las cooperativas de trabajo no revisten la calidad de dependientes de las mismas, debiendo considerárselos como trabajadores autónomos (art. 1).

“El simple cumplimiento de recaudos formales tales como la debida inscripción de la cooperativa ante los órganos correspondientes, el hecho de que ella lleve sus registros conforme a derecho, de que cumpla las normas tributarias destinadas a este tipo de sociedades, de que sus asociados estén inscriptos como autónomos antes los organismos de recaudación y perciban sus ingresos en concepto de "anticipo de retorno" y de que periódicamente se lleven a cabo asambleas, no resulta suficiente para descartar la posibilidad de que la verdadera naturaleza del vínculo haya sido laboral. En tales casos la controversia debe ser dilucidada considerando fundamentalmente si el trabajador tuvo efectiva injerencia en la formación de la voluntad social mediante su participación en las asambleas que correspondía convocar para tales fines, ya que ésta es una característica esencial del vínculo cooperativo que no halla su correlato en el derecho del trabajo. (Toq. 1204.Guibourg. Eiras.12.787/04 .”González, Leandro Ruben C/ Pretor Cooperativa De Trabajo Limitada Y Otro S/Despido. 30/06/06).

Fecha de firma: 30/11/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37800794#386179802#20231128090456530



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Se ha dicho, asimismo, que “si el trabajador se desempeñó como asociado de una cooperativa de trabajo legítima y entendió con sinceridad el cumplimiento de funciones como acto cooperativo con derecho a retribución en concepto de retornos, no es admisible que se pretenda modificar dicho encuadramiento cuando no se advierte una situación de fraude a la ley laboral (Barreto M. c/ Cooperativa de trabajo General Mosconi Ltda. C.N. Trab. Sala VI, 15/10/81).

Por lo tanto, será pura y exclusivamente una cuestión de hecho y prueba demostrar que aquellos asociados cooperativos revisten, en realidad, el carácter de trabajadores y que se está frente a una simulación en fraude a la ley.

En una cooperativa de trabajo genuina la calidad de socio excluye la de trabajador dependiente. A menudo las diferencias entre un vínculo societario y uno regido por el derecho laboral resultan difíciles de apreciar, pero es carga de quien invoque la existencia de una relación de trabajo extremar los recaudos para acreditar, en cada caso, que la forma cooperativa del ente en que el agente prestaba servicios no se ajustaba, en realidad, a las normas y al espíritu del régimen específico que la regula.

El artículo 21 de la L.C.T. consagra el principio de primacía de la realidad al establecer que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. A ello se aduna las normas contempladas en la ley laboral protectorias del régimen de contrato de trabajo (ej. Arts. 7.13 y 15) De allí que lo pactado por las partes cede ante la realidad de los hechos aunque se formalice por instrumentos públicos (Vázquez Vialar Tratado, t.II, p. 270).

Esta Sala en su anterior integración tiene dicho que “En todo procedimiento por impugnación de deuda entraña un elemento probatorio de relevancia a los fines de acreditar la naturaleza del vínculo controvertido por las partes, la declaración espontánea vertida por un trabajador en el domicilio de la empresa ante el inspector del Ministerio de trabajo de la Nación que practicó la inspección y labró el acta correspondiente (v. C.F.S.S. Sala II, expte N° 9466/1999 “Supermercados Cáceres S.R.L. C/ A.F.I.P. –D.G.I. s/ impugnación de deuda “ ídem:Sala I. expte. M° 31380”Carlini ,Elido y Soulier Rubén SD.A. C/ A.F.I.P. D.G.I. S/ impugnación de deuda. entre muchos otros).

”En principio, las reglas de la experiencia y de la sana crítica en la valoración de los hechos no autorizan a presumir que una persona relevada por un funcionario público en un procedimiento rodeado de todas las garantías y formalidades de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

ley (CCCN arts. 289, inc. “b” y 296) , vaya a falsear la realidad de un vínculo jurídico que lo tiene como protagonista o a mentir a la autoridad pública sobre la naturaleza del mismo” (Causa 12402/2013 ”Latin Express Financial Services Argentina .S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - D.G.I. s/ Impugnación de Deuda, (sentencia del 16 de marzo de 2018) Sala II anterior integración, de la Cámara Federal de la Seguridad Social)

“En efecto, si se tratara de un trabajador en negro – patología muy extendida en el mundo del trabajo-mentirle a la autoridad de aplicación para conservar los pocos mendrugos que percibe esa persona en el marco de una relación jurídica clandestina, significaría no sólo renunciar a las leyes protectoras del trabajo, sino también a su futura jubilación, lo cual resultaría inconcebible e irrazonable avalar en una decisión jurisdiccional, sin una prueba acabada y fehaciente sobre estos hechos contrarios al sentido común y a lo que normalmente sucede en la realidad “ (in re “Latin Express Financial Sevices Argentina S.A.” anteriormente citado).

“La carga de la prueba pesa- por disposición expresa de la ley de fondo- sobre el sujeto que niega o impugna el contenido de las declaraciones plasmadas en un instrumento público (actas de inspección, infracción y determinación de deuda) es decir que esa carga procesal pesa – en el supuesto de autos- sobre la empresa impugnante" (in re “Latin Express Financial Services Argentina S.A.” citado).

En el presente caso, el sujeto relevado manifestó ante la inspección, como se ha señalado, que se encontraba trabajando para la cooperativa, informó su fecha de ingreso y remuneración que percibía, así como que no forma parte de cooperativa algún, todos ellos, indicios de una relación dependiente y no autónoma como pretende la Cooperativa.

Considero de trascendental importancia esta declaración espontanea efectuada por el trabajador relevado. Con lo cual, le corresponde al intimado producir las pruebas conducentes a demostrar la falsedad de los hechos en los que se sustentan las actas de inspección labradas por el organismo (CPCC art. 377). La Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antiguo ha sostenido que “acreditada la materialidad de la infracción, de ello resulta la intención de defraudar, salvo prueba suficiente de su inocencia por el contribuyente” (Fallos 210:1229; 225:412, entre muchos otros).

El acta la de inspección que extendió el agente público constituye- como se ha expresado- un instrumento público, el cual no fue impugnado mediante prueba en contrario ni redargüido de falso por la parte interesada, por lo que hace plena fe el contenido de las declaraciones y enunciaciones de hechos relacionados con el objeto principal del acto instrumentado (v. CPCCN, artículo 296).

Fecha de firma: 30/11/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37800794#386179802#20231128090456530



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Con lo cual, más allá de la apariencia que se haya dado a la relación que uniera a las partes, lo que cuenta es la verdadera situación creada, sin que importe el nombre de la estructura societaria utilizada. Corresponde determinar, sobre la base de los hechos probados, la naturaleza jurídica del vínculo sin que la apariencia real disimule la realidad, lo que, en el caso, se traduce a la existencia de un verdadero contrato de trabajo.

De ello resulta que, el presente caso debe ser resuelto a la luz de lo establecido en el art. 23 LCT, que expresamente establece que “el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de contrato de trabajo [presunción no desvirtuada en autos]; esta presunción operara aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato y en tanto por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta servicios”.

La presunción de existencia del vínculo laboral en los términos del artículo mencionado precedentemente que dimana del hecho de haberse encontrado a la persona por la que se impuso la multa por infracción a la ley 11.683, prestando servicios para la actora, no se halla desvirtuado, lo que concuerda con lo normado por el art. 4 de la Ley 26.063 en el ámbito de la seguridad social en el que “se presumirá salvo prueba en contrario, que la prestación personal que se efectúa a través de un trabajo se realiza en virtud de un contrato laboral pactado, sea expresa o tácitamente, por las partes”.

En consecuencia, corresponde confirmar la decisión que desestimo la impugnación dirigida contra la que le impuso una multa por infracción a la ley 11.683 articulo agregado sin número a continuación art. 40, toda vez que considero insuficientes los elementos aportados que permitan variar lo decidido en la instancia administrativa ni desvirtuar sus fundamentos, es decir, del hecho generador de la infracción imputada.

En atención al modo como se resuelve, las costas se imponen al vencido, conforme art. 68 CPCCN y criterio del Alto Tribunal en los autos ["Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos CD.G.I.C"](#) con fecha 5 de octubre de 2004, oportunidad en que el Tribunal modificó la doctrina de Fallos: 323:1557.

Con respecto a la regulación de honorarios que imponen los artículos 163 y 164 del C.P.C.C.N., cabe tener presente que la ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica, dado que dicho texto legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así y teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación, en cuanto a que la regulación de honorarios no debe depender exclusivamente del monto del reclamo, sino que deberá ser ponderada por los jueces, bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la

Fecha de firma: 30/11/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37800794#386179802#20231128090456530



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:302:534 y sus citas; 320:495; 339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1.255 del Código Civil y Comercial de la Nación se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 2 UMA equivalente a \$ 50.746 –pesos cincuenta mil setecientos cuarenta y seis- y 4 UMA a favor de la representación letrada de la parte demandada equivalente a \$ 101.492 –pesos ciento un mil cuatrocientos noventa y dos- (valor UMA 25.373- conf. Res. CSJN 2722/023).

Por las consideraciones expuesta propicio: 1) Confirmar la resolución recurrida; 2) Imponer las costas al vencido (Conf. Art. 68 CPCCN); 3) Regular los honorarios correspondientes a la dirección letrada de la parte actora en 2 UMA equivalente a \$ 50.746 –pesos cincuenta mil setecientos cuarenta y seis- y 4 UMA a favor de la representación letrada de la parte demandada equivalente a \$ 101.492 –pesos ciento un mil cuatrocientos noventa y dos- (valor UMA 25.373- conf. Res. CSJN 2722/023), 4) Oportunamente devuélvase al organismo.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto de mi colega preopinante.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Fantini

En mérito de lo que resulta del presente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la resolución recurrida; 2) Imponer las costas al vencido (Conf. Art. 68 CPCCN); 3) Regular los honorarios correspondientes a la dirección letrada de la parte actora en 2 UMA equivalente a \$ 50.746 –pesos cincuenta mil setecientos cuarenta y seis y 4 UMA a favor de la representación letrada de la parte demandada equivalente a \$ 101.492 –pesos ciento un mil cuatrocientos noventa y dos- (valor UMA 25.373 conf. CSJN Res. 2722/2023); 4) Oportunamente devuélvase al organismo.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

WALTER FABIAN CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

Fecha de firma: 30/11/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37800794#386179802#20231128090456530



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

ANTE MÍ: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

JSM

